

EDITORIAL

Parece haberse asumido como algo «normal» que cuando se produce un cambio en el gobierno de la Nación irremisiblemente se acometa una reforma del sistema estatal de enseñanza. Sabiendo de antemano que no durará, a no ser que el partido en el poder salga victorioso nuevamente en los comicios siguientes. Algo incomprensible y contra toda lógica, exceptuando, claro está, la lógica de la renta electoral. Este ir y venir del sistema nacional de formación, y el populismo que lo guía, son perniciosos para la salud pública del Estado, pues de aquel depende, en buena medida, el futuro y la prosperidad de éste. Algunos efectos están ya a la vista, aunque seguramente los mayores destrozos que la educación española ha sufrido en los últimos años se dejarán sentir más adelante, cuando las jóvenes generaciones de hoy sean las dirigentes de mañana.

El sistema nacional de enseñanza falla, estrepitosamente. El 26% de los alumnos no logra finalizar la enseñanza obligatoria, y el 23% y el 21% de los estudiantes de enseñanza media se muestran incapaces de alcanzar los mínimos exigidos en matemáticas y en lengua, respectivamente. Las dos últimas cifras, según el Informe PISA 2003, relegan a España a los últimos puestos en la OCDE, por detrás de Polonia, Hungría y la República Checa. Vergonzoso y humillante para España; tal fracaso en la formación de los ciudadanos es más propio de países en vías de desarrollo, pero no de España, que, habiendo conquistado «a pulso» el Estado Social de Derecho hace tiempo, debería estar en la vanguardia europea y ser ejemplo para el resto de países miembros.

Las razones que se arguyen para justificar tal descalabro suelen ser la escasa inversión del Estado en educación y en formación, que no ha habido suficiente tiempo y voluntad para aplicar de forma idónea la reforma de 1990 y que el compromiso de los agentes implicados en la enseñanza ha sido y sigue siendo tímida y escasa. Las dos primeras observaciones carecen de sentido, pues Corea del Sur, por ejemplo, dedica menos recursos a la formación de los ciudadanos que España, y se sitúa en los tres primeros puestos de la lista, y la reforma del sistema de enseñanza que acometió Polonia, tomando otro ejemplo, es más reciente (1999) que la española, y ha obtenido unos resultados en absoluto desdeñables. Así pues, el problema es esencialmente del propio sistema, de la LOGSE, que se ha mostrado incapaz de responder eficazmente a las necesidades sociales, políticas y económicas del País. Sin

embargo, la tercera razón cobra cada vez más fuerza, y con sentido, aunque se hierra la percepción del problema y en las propuestas para solucionarlo; se pretende hacer creer a los ciudadanos que los culpables del descalabro son los profesores, que en verdad hacen lo que pueden y lo que les dejan, cuando la realidad es bien diferente. Los padres han descuidado la educación de los hijos, traspasando esta responsabilidad a los maestros, los cuales se han convertido en «padres adoptivos forzosos» de los muchachos, además de continuar con la labor primordial que tienen encomendada: la formación. Y los alumnos, siguiendo el ejemplo de los progenitores, eluden cualquier responsabilidad en la propia formación. Por tanto, el problema se reduce a una cuestión de asunción de responsabilidades y cumplimiento de deberes, y hasta que la situación cambie será infructuosa cualquier reforma del sistema estatal de enseñanza que implique la colaboración de los padres y demás agentes sociales.

Pero si el fracaso en las cuestiones básicas de la formación pueden comprometer el progreso de la Nación, la ausencia de las Humanidades en los planes de estudio puede hacer peligrar la convivencia democrática de aquella. Paulatinamente, las Humanidades han ido perdiendo terreno en los currículos oficiales, dejando paso a la técnica, al procedimiento, carente de sentido sin una guía y sin un contenido claro y sólido. Para hacer frente a las «lagunas formativas» generadas por la ausencia del Humanismo, se implantaron los llamados Temas Transversales, que, en cierto modo, no han pasado de ser una forma refinada de adoctrinamiento y fabricación de «hombres-consigna» de cortas miras. Pero el despropósito no se ha quedado ahí. Hace bien poco, el gobierno ha anunciado que establecerá una nueva área de «estudio», de «Educación para la Ciudadanía», para formar a los alumnos en «valores democráticos»; un verdadero insulto para los ciudadanos de Occidente. Tal propuesta, además, encierra algunos peligros, entre ellos, la posibilidad de oficializar la idea de democracia, pues las directrices que guiarán los contenidos de la nueva área estarán dictadas por el propio gobierno, por el partido en el poder. Ojalá que todos aquellos que se han dedicado a estudiar el «currículum oculto» demuestren, a partir de ahora, más denuedo en tal cometido, pues se está jugando con algo mucho más serio que con la supuesta discriminación de la mujer: con la Democracia, ni más, ni menos.

Así, España no camina con buen rumbo, y corre el peligro de perderse para siempre. Todo indica que es el momento de recapitular, revisar y hacer algo nuevo, con sentido, ajustado a la realidad y que proporcione una formación sólida a los muchachos. El sistema nacional de enseñanza, por su relevancia en el devenir de la Nación, ha de trascender las limitaciones y los intereses partidistas, debe abogar inexorablemente por un Pacto de Estado, a modo del constitucional de 1978, pues siempre debe primar el bien de la república, de la cosa pública.